CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL.

MINERÍA A CIELO ABIERTO EN MANANTLÁN

Darcy Tetreault
Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, UAZ
darcytetreault@yahoo.com

La mina de hierro más grande de México se ubica en la Sierra de Manantlán, en una región caracterizada por altos índices de pobreza y marginación, inseguridad y conflictividad. En muchos sentidos, la dinámica de la minería en esta región es prototípica de lo que está pasando en todas partes de América Latina: los beneficios se privatizan, se concentran en las manos de los ricos, en este caso los principales accionistas del Consorcio Peña Colorada, incluyendo y sobre todo Lakshmi Mittal, uno de los hombres más ricos del mundo; mientras que los costos, en la forma de degradación ambiental masiva, se socializan entre la gente pobre, en este caso los náhuas que han vivido en Manantlán desde tiempos inmemoriales.

La Sierra de Manantlán se ubica al suroeste de Jalisco y norte de Colima, cerca de la costa, donde confluyen tres cordilleras montañosas: la Sierra Madre del Sur, el Eje Neovolcánico Transversal y la Sierra Madre Occidental. Esta confluencia da lugar a altos niveles de biodiversidad y una abundancia de recursos forestales, minerales e hidrológicos. En esta región pintoresca se encuentran casi cien localidades habitadas por indígenas de descendencia nahua y otomí que viven en condiciones de pobreza extrema y alta marginación. Los indígenas de Manantlán tienen una larga historia de lucha por la tierra, los recursos naturales y los derechos humanos, agrarios e indígenas.¹

Hoy en día, el conflicto ecológico más agudo gira en torno a la destrucción ambiental y represión asociadas con la explotación minera.

El actor privado más importante en este escenario es el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, cuya mina de hierro en Manantlán es la más grande del país y representa 30 por ciento de las reservas nacionales.²

Dicho consorcio nació como una paraestatal en 1967, para posteriormente ser privatizado. Actualmente es subsidiaria de dos poderosas corporaciones transnacionales: *Mittal Steel*, cuyo principal accionista es el multimillonario Lakshmi Mittal de nacionalidad india; e *Hylsa Ternium*, de capital argentino-italiano. Otras empresas mineras que operan en Manantlán incluyen la Comercializadora Internacional de Minas, de capital chino, y la Minera del Norte (anteriormente Minera Monterrey). Todas operan minas a cielo abierto que destruyen por completo los cerros que contienen minerales. Tras de sí dejan montones de piedras contaminadas y envenenan el sistema hidrológico a través del proceso de lixiviación y aterramiento, lo que significa un riesgo latente a largo plazo. El consorcio Peña Colorada utiliza, además, grandes cantidades de agua para transportar el hierro a

través de un sistema de tuberías que se extiende 44km hasta el puerto de Manzanillo. El uso de este sistema evita al consorcio minero utilizar transporte terrestre y le permite mantener un bajo costo de producción, al punto de ser líderes en el mercado.

Los pobladores cercanos se quejan por el despojo de tierras y fuentes de agua, y por la muerte de su ganado que bebe las aguas contaminadas. Por otra parte, acusan al capital minero y a sus cómplices en el gobierno de estar detrás de actos de violencia e intimidación para proteger sus intereses y reprimir a la población inconforme. De hecho, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) han documentado una serie de violaciones en Manantlán. Entre las más preocupantes figuran el hostigamiento, detenciones arbitrarias, golpes y al menos 20 ejecuciones de campesinos indígenas. A pesar de estas denuncias, la impunidad reina hasta la fecha.

Parte del problema es la incertidumbre jurisdiccional que existe en la zona minera, disputada por los estados de Jalisco y Colima. Las raíces se remontan a 1920, cuando el hacendado colimense Carlos Fernández, al enterarse de las riquezas minerales ubicadas al oeste del río Marabasco, reclamó la zona como suya y ordenó a sus sicarios matar a trece de los indígenas que rehusaron alejarse.³ 50 años después, el estado de Colima arbitrariamente extendió su jurisdicción sobre la misma zona al otorgar derechos de usufructo al Consorcio Peña Colorada y a otras compañías mineras para explotar los yacimientos ferrosos. De esta manera, en 1969 inició la explotación minera industrial a gran escala en la región.

La disputa fronteriza sigue vigente hasta la fecha, a pesar de que han transcurrido ocho años en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para posteriormente pasar al Senado. En efecto, la falta de certeza

jurídica sobre el territorio sirve para proteger los intereses de las compañías mineras, que hacen todo lo posible para no derramar sus ganancias en la zona, ni internalizar los costos ecológicos de sus actividades, maximizando así las ganancias de sus accionistas. La misma incertidumbre jurídica funciona como un pantano burocrático, donde se estancan las exigencias de los indígenas que luchan para poner fin a la destrucción medioambiental y a la constante violación de sus derechos humanos.

En 1988, más de 100 indígenas de Manantlán hicieron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Colima para protestar por los problemas causados por la minería y los casi nulos beneficios. Sin embargo, no fue sino hasta principios de los años noventa que Peña Colorada empezó a aportar modestamente al cofinanciamiento de proyectos de desarrollo comunitario, en el marco del Programa Nacional de Solidaridad. En 1998, dicho consorcio firmó un contrato con el comisariado de Ayotitlán, el núcleo agrario más grande de la Sierra; pagó 1.5 millones de pesos para explotar los recursos minerales de esta comunidad durante los siguientes 30 años. Además, prometió pagar al ejido 136.6 mil pesos anuales por el derecho de tirar desechos industriales, así como 40 mil pesos anuales “para gastos del comisariado ejidal”. Si bien estos pagos representan un avance, es importante poner las cosas en perspectiva: los pagos al ejido de Ayotitlán sólo representan aproximadamente 2 centavos por cada mil pesos de las ganancias anuales de Peña Colorada, y no contemplan los 27 años de explotación antes de llegar al acuerdo. Por otra parte, el representante legal del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla Roblada, asegura que hasta fechas recientes el dinero pagado al comisariado ejidal no había sido manejado con transparencia.

Actualmente, el Consejo de Mayores es la organización local que encabeza la lucha en contra de la minería ecológicamente devastadora y socialmente irresponsable en Manantlán. El Consejo fue reconstituido en 1997 a imagen similar de las autoridades indígenas tradicionales del pueblo nahua (vigentes hasta antes de la imposición del modelo ejidal), con el propósito de defender el territorio y los recursos naturales de la comunidad, y para servir como espacio de diálogo comunitario y para la resolución de conflictos. Cuenta con la asesoría de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara y está vinculado al movimiento indígena nacional a través del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico.

Hay otra organización local que ha incidido en esta lucha. En 2006, la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) impulsó la creación del Frente Regional pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), con el objetivo de “resolver de manera pacífica y efectiva el ancestral conflicto limítrofe y ecológico que enfrentan

los estados de Jalisco y Colima” (citado de la constitución jurídica del Fremmar). En la práctica, esto se traduce en un enfoque en la defensa de los derechos humanos, sobre todo para los indígenas que viven en la franja fronteriza en disputa. Los siete miembros de su Consejo Directivo han participado en la elaboración de informes y denuncias sobre la represión violenta asociada con las actividades mineras. Además, en su afán por promover la reflexión y acción frente a la minería a cielo abierto, han participado en diversos eventos coordinados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), incluyendo un taller que se llevó a cabo en el poblado de Telcruz (que forma parte del ejido de Ayotitlán) del 12 al 14 de junio de 2009.

Durante los últimos cinco años, los luchadores sociales de la Sierra de Manantlán han logrado detener la expansión de las actividades mineras y llamar la atención sobre la violación de los derechos de la población local. En 2005,

la minera Peña Colorada trató de abrir una nueva mina en el ejido de Ayotitlán. Para este fin, financió la campaña de uno de sus contratistas —un ejidatario llamado Jesús Michel Prudencia— para que éste llegara a ser presidente del comisariado de Ayotitlán. Con la compra de votos, la manipulación del padrón ejidal y algunas otras irregularidades, Michel Prudencia ganó fraudulentamente las elecciones del 23 de octubre del mismo año, respaldando así los planes de expansión. Sin embargo, los miembros del Consejo de Mayores, junto con sus asesores de la Universidad de Guadalajara, se movilizaron para no permitir esto. El Consejo interpuso un juicio agrario para protestar por el fraude cometido en las elecciones ejidales y solicitó el amparo y protección de la justicia federal, con el objetivo de detener la construcción de caminos y otras obras preparatorias. Con esta acción jurídica se logró paralizar los planes de Peña Colorada para extraer 150 mil toneladas de hierro en una operación “exploratoria” cerca de los poblados de Chanquiáhuil y Cerro Prieto.

De la misma manera, a finales de 2007, el Consejo detuvo a la compañía minera Comercializadora Internacional de Minas cuando ésta trató de introducirse en el ejido sin los permisos gubernamentales necesarios, mucho menos con la aprobación de la comunidad. En este caso, el Consejo no sólo interpuso un juicio de amparo para detener la intrusión, sino que también movilizó a centenares de miembros de la comunidad para incautar la maquinaria de dicha empresa, que ya había empezado a abrir caminos y extraer minerales. En julio de 2008, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de Guadalajara emitió un dictamen que efectivamente desconocía a Michel Prudencia como comisario del ejido de Ayotitlán. Sin embargo, no fue hasta noviembre del mismo año que el Consejo finalmente logró retirarlo de su puesto, a través de la vía electoral, cuando un ejidatario afín al Consejo, Juan Mancilla, ganó las elecciones ejidales, cambiando así el balance de poder en el ámbito local. Desde entonces, la relación entre el ejido y Peña Colorada se maneja con mucha más transparencia, mientras se buscan soluciones a largo plazo a la compleja problemática en torno a la minería.

Por lo pronto, el Consejo de Mayores y sus aliados no ven la posibilidad de cerrar definitivamente las minas, ni de apropiarse de ellas, para posteriormente explotarlas de una manera social y ecológicamente responsable, en beneficio de la comunidad. Como tal, siguen luchando para exigir la mitigación de los impactos ecológicos más nocivos, para obtener más beneficios de la actividad minera y poner fin a la represión y violencia. Ha habido avances. Entre los más importantes se destaca un alto a la expansión de las actividades mineras, la democratización del aparato político del ejido de Ayotitlán y una indemnización parcial pagada al mismo ejido. El trabajo de las organizaciones civiles mencionadas, además, ha contribuido a llamar la atención sobre la constante violación de los derechos humanos en la Sierra de Manantlán. Desde luego, la concientización es parte de la solución. Mientras la impunidad siga vigente y las compañías privadas continúen arrasando los cerros sin contribuir sensiblemente al desarrollo local, la lucha en contra de la minería a cielo abierto en Manantlán seguirá.

Referencias

- ¹ Para un análisis detallado de esta historia, véase Rojas, Rosa (coord.) (1996), *La comunidad y sus recursos: Ayotitlán ¿Desarrollo sustentable?*, Universidad de Guadalajara/ Instituto Nacional Indigenista, Guadalajara; Lucio, Carlos (coord.) (2008), *El pueblo de Ayotitlán: Pasado, presente y perspectiva*, Universidad de Guadalajara/ Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara y Aguascalientes; Tetreault, Darcy (2009), *Pobreza y degradación ambiental. Las luchas de abajo en dos comunidades del occidente de Jalisco: Ayotitlán y La Ciénega*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
- ² Los cálculos sobre el tamaño de las reservas minerales de Peña Colorada como porcentaje del total nacional varían entre 30 y 40 por ciento. Aquí, se confía en los datos proporcionados por Loeza-Corichi, Alicia y Raquel Gutiérrez-Nájera (1996), “Evaluación de las afectaciones al ambiente relacionadas con las actividades del Consorcio Minero ‘Benito Juárez Peña Colorada’ SA de CV”, *Revista Jurídica Jalisciense*, año 6, no. 3, septiembre-diciembre: 41-62.
- ³ Brambila, Crescenciano *apud* Rojas, Rosa (1996): 92-93.